

REDES POLÍTICAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA: MÁS ALLÁ DE LA AUTONOMÍA Y LA COOPTACIÓN

SOLEDAD VALDIVIA RIVERA
UNIVERSIDAD DE LEIDEN

Resumen:

El debate académico sobre los movimientos sociales en América Latina ha tendido a enfatizar la oposición al Estado como un rasgo definitorio de estos actores, recurriendo a categorías de ‘autonomía’ y ‘cooptación’ en el análisis. En los últimos 15 años los movimientos sociales en Bolivia han penetrado las estructuras estatales y han desempeñado un rol determinante en el escenario político. Esto ha planteado serias preguntas sobre su autonomía política, con respuestas contradictorias respecto a su posición (cooptada o bien autónoma) en relación al Estado. El presente artículo sugiere una caracterización alternativa en la que los actores estatales y sociales interactúan en ‘redes políticas’, las cuales se articulan alrededor de asuntos específicos y que se encuentran sujetas al cambio. Sobre la base del debate académico más reciente que cuestiona la dicotomía Estado-Sociedad y la división entre políticas ‘institucionalizadas’ y ‘no institucionalizadas’, se sostiene que la complejidad de la relación en Bolivia obliga al análisis a moverse más allá de modelos rígidos de ‘autonomía’ y ‘cooptación’.

Summary:

The dominant Latin American debate has tended to characterize social movements by their manifest antagonism vis-à-vis the State, making recurrent use of categories of ‘autonomy’ and ‘co-optation’. In the last 15 years the social movements in Bolivia have become central political players, and closely intertwined with political institutions. This has raised questions and concerns about their political autonomy with contradictory answers about their autonomous or co-opted position in relation to the State. This article suggests an alternative characterization in which State and social actors interact in ‘political networks’, that are articulated around specific issues and that are subject to constant change. Building on recent social movement theory that questions the State-Society dichotomy and the division between ‘institutionalized’ and ‘non-institutionalized’ politics, it contends that the complexity of the State-social movements relation in Bolivia compels the analysis to move beyond fixed patterns of ‘autonomy’ and ‘co-optation’.

Introducción

El debate académico en América Latina sobre los movimientos sociales ha tendido a enfatizar la manifiesta oposición de dichos actores en relación al Estado. Sin embargo, el escenario político boliviano de los últimos quince años diverge considerablemente de este modelo. A partir del año 2000 los movimientos sociales en Bolivia asumen un papel central en la arena política, con un carácter político que se hace explícito con la creación del “instrumento político” –el Movimiento al Socialismo (MAS)-- en la década de los ‘90. Además de las victorias electorales del MAS (2002, 2005, 2009, 2014), la centralidad de los movimientos sociales en Bolivia encuentra expresiones claras en la reversión de planes gubernamentales durante la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003), el sello de los movimientos sociales durante el periodo de la Asamblea Constituyente, y su rol protagónico en los conflictos políticos en el segundo término gubernamental de Morales.

Este trabajo parte de la constatación que la relación entre el gobierno del MAS y los movimientos sociales en Bolivia tiene contenidos diversos, que varían en el tiempo, y que con frecuencia se muestran contradictorios. Se postula que un análisis más convencional que busca analizar la relación entre el movimiento social y el Estado en términos de autonomía y cooptación produce caracterizaciones discordantes que terminan por oscurecer --más que esclarecer-- la comprensión de dicho relacionamiento. Esto se debe en gran

parte a que dicha terminología presupone la posibilidad de hacer una división analítica entre el Estado y la Sociedad, la cual en el escenario político boliviano resulta cada vez más artificial, o al menos ‘insuficiente’ para el análisis (Tapia 2009).

Tanto el fenómeno del MAS como la relación entre el Estado y los movimientos sociales obligan un enfoque hacia los espacios de interacción entre el Estado y la Sociedad, en donde los límites entre una y otra esfera se tornan porosos o borrosos. Por ello, en este trabajo se sugiere el concepto de “redes políticas”. El análisis a través de este concepto, por su énfasis en las interconexiones cualitativas entre actores sociopolíticos, resuelven muchas de las contradicciones e incoherencias que emergen de un análisis en términos más convencionales y permite así una mejor apreciación de la compleja dinámica que define la relación entre los movimientos sociales y el gobierno de Evo Morales.

El trabajo está organizado en cuatro secciones. La primera parte ofrece una breve discusión del debate académico sobre el papel de los movimientos sociales en la consolidación democrática en América Latina, en donde persiste su oposición al Estado. Asimismo se muestra cómo el debate más reciente cuestiona la separación entre el Estado y la Sociedad, y problematiza la división entre por un lado los movimientos sociales (en el ámbito de lo social), y los partidos políticos y el Estado por otro (en el ámbito político institucional). Sobre estas bases teóricas, la segunda sección analiza el

fenómeno del MAS, mostrando la dificultad de su conceptualización como “movimiento social” o “partido político”, o incluso como “partido movimiento” --un concepto híbrido. Bajo esta constatación, la tercera sección introduce y discute el concepto de “redes políticas”, el cual permite una caracterización alternativa tanto del MAS como de la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Dicha caracterización se discute en la cuarta sección, analizando el proceso constituyente (2006-2009) y tres conflictos entre el Estado y los movimientos sociales en el periodo post 2009: el “gasolinazo”, la construcción de la carretera por el parque nacional TIPNIS, y el conflicto político con el sector de salud.

Estado y movimientos sociales en América Latina

La gran parte del estudio sobre los movimientos sociales se basa sobre una división conceptual entre el Estado y la Sociedad, que responde a desarrollos históricos.¹ En el contexto latinoamericano, esta visión dicótoma se ha visto reforzada por la experiencia con regímenes autoritarios, en la que la sociedad civil se constituyó como el espacio para la organización de fuerzas de resistencia hacia el Estado de dictadura, creando así una situación real de oposición entre ambos actores

¹ Esta separación conceptual no es exclusiva de la región, pero como argumenta Aminzade, es el resultado histórico de las luchas políticas sobre el concepto de representación política en el siglo XIX (Aminzade 1995).

políticos (Dagnino 1998; O'Donnell y Schmitter 1986).

En la literatura post-transicional se pueden destilar dos posiciones respecto del papel de los movimientos sociales en la consolidación democrática. El primero ve en el movimiento social un rival para una democracia institucionalizada. En esta postura, los partidos políticos sirven (idealmente) de vehículos de representación de los grupos de la sociedad, organizándolos y normando el acceso al poder estatal, creando así un escenario de estabilidad y gobernabilidad democrática.² Los movimientos sociales representan a grupos de ciudadanos que impugnan este sistema, y como tal forman un rival potencial – una amenaza – a lo que debiera ser un sistema político de representación institucionalizado y efectivo (Craig Jenkins 1995). El sistema político es entendido como el conjunto de organizaciones institucionalizadas que pretenden representar y agregar los intereses de varios grupos de intereses sociales.

La segunda posición adjudica un papel más positivo a los nuevos movimientos sociales. Desde esta posición se reconoce y aplaude la función de los movimientos sociales como espacios de resistencia, desde los

² El partido canaliza al mismo tiempo que expresa intereses, dando más espacio a unos que otros lo cual afecta directamente la gobernación y estabilidad democrática. La importancia de un grado de institucionalización del sistema partidario radica en que falta de ello tiene consecuencias negativas para la democracia. Un sistema partidario débil no estructura el proceso político, lo cual produce políticas menos institucionalizadas y por lo tanto más impredecibles. Véase por ejemplo Scott Mainwaring *et al.* (1995)

cuales se busca presionar demandas en las estructuras estatales. Por ello, esta posición adjudica un valor importante a la autonomía del movimiento social respecto del Estado, en la que advierte el riesgo de caer en trampas de cooptación o manipulación por parte de los gobiernos.³ La lucha de los movimientos sociales crea espacios para la articulación de demandas que no encuentran resonancia en los canales formales de representación y, a través de la presión, tienen así el importante efecto de hacer que las instituciones se vuelvan más atentas de las necesidades de la sociedad.

A pesar de las diferencias, lo cierto es que en ambas posiciones persiste en mayor o menor medida una división entre las instituciones (el Estado y los partidos políticos) por un lado, y los movimientos sociales y la ciudadanía por otro. Esta división deriva en realidad de la dicotomía Estado-Sociedad. En el debate académico sobre movimientos sociales más reciente, esta separación ha sido objeto de serios cuestionamientos. Para la región latinoamericana, uno de los argumentos más importantes plantea que la dicotomía expresaría una distinción entre dos posiciones políticas antagónicas, más que una separación teórica, que empieza a carecer de sentido al reinstaurarse la democracia.⁴

³ Al respecto algunos actores sostienen que la maximización de la autonomía de los movimientos sociales contribuyen a su papel como protagonistas de la construcción de democracias más inclusivas, porque mejoran su posición de negociación. Mirza (1995); Forewaker (1995).

⁴ De manera más general, se cuestiona también la dominancia del paradigma Estado-Nación, en

Si en un momento, en particular en el debate académico sobre los ‘nuevos’ movimientos sociales, dichos actores se distinguían por su carácter “a-político” o por moverse en espacios distintos a los de la política institucional, en la literatura reciente esta separación pierde asidero. Bajo el término de “contentious politics” (Tilly y Tarrow 2007; Tarrow 1998; Seferiades y Johnston 2012) la mayoría de los científicos sociales estudian a los movimientos sociales como parte de la práctica política, bajo el entendido de que los movimientos sociales constituyen un modo más de hacer política, más popular y menos elitista (Johnston 2011, 1).

En la misma línea, el cuestionamiento a la dicotomía Estado-Sociedad se observa en el debate académico que problematiza la

el cual se presume al Estado y la Sociedad como actores unitarios y coherentes, y que sienta así la base para una separación como también el carácter conflictivo que se adjudica a la relación entre ellos. Como ente unitario, el Estado aparece en una esfera elevada con facultades extraordinarias, ejerciendo una suerte de tutelaje sobre la ciudadanía en una relación vertical, “minimalizando y trivializando la rica negociación, interacción, y resistencia que ocurre entre sistemas múltiples de reglas en la sociedad humana” (Migdal 2001, 15). Para el contexto latinoamericano Dagnino *et al.* (2006) explican que el Estado ha sido entendido como homogéneo y como la encarnación de todos los vicios de la política, desconociendo la diversidad de sus prácticas y las interacciones estatales que se han formado en distintos actos o periodos políticos. Así, el Estado latinoamericano presentaría una diversidad estructural en su interior, en la forma de ministerios y las instituciones a nivel nacional y local, que ha producido alianzas y pactos distintos y cambiantes, con diferentes grupos de la sociedad.

separación entre la política “institucionalizada” y la “no institucionalizada” (Costain y McFarland 1998; McAdam, Tarrow y Tilly 2001). Goldstone (2003) explica que en el vasto estudio de la interacción entre el Estado y los movimientos sociales existe una tendencia persistente a ver dichas prácticas como algo distinto a las políticas institucionalizadas, entendidas como el acto de votar, los partidos políticos, la legislatura, cortes y líderes electos. El autor defiende más bien la proposición que los movimientos sociales constituyen un elemento esencial de la política normal en las sociedades modernas, y que sólo existe una frontera difusa y permeable entre la política institucionalizada y la política ‘no-institucionalizada’ (Goldstone 2003, 1-3).

Así, existen distintos trabajos que no sólo han buscado elucidar la porosidad o permeabilidad de la frontera que divide al movimiento social de los partidos políticos, sino que también han presentado esfuerzos por detallar qué ocurre cuando un movimiento se vuelve partido (y después gobierno) (Glenn 2003; Desai 2003; Roberts 1998; Schönwalder 1997; Anria 2013; Van Cott 2008, 2005). Dichos autores coinciden en que este tipo de actores – “partido movimiento” (Kietschelt 2006) o “partido orgánico” (Roberts 1998) – encara una serie de dificultades y tensiones que complican su posición respecto de la base social que representan como también el poder

político a través del cual pretenden realizar sus objetivos.⁵

El Movimiento al Socialismo: ¿movimiento social o partido político?

Los resultados electorales del 2005 permitieron una incursión de los movimientos sociales en las instituciones estatales, a través de la figura política del MAS que fungió como un ente de vinculación entre el Estado y los movimientos sociales.

El MAS nace como el “instrumento político” de distintas organizaciones indígenas y campesinas, las últimas con una expresa tradición sindical, con el objetivo de acceder a los espacios de poder político a nivel local, recién creados por políticas de descentralización en los años 90. La combinación de una serie de factores, dentro de la cual se destacan los éxitos electorales en la región cocalera del Chapare, como la crisis de legitimidad de los partidos políticos, catapultaron al MAS a la política nacional.⁶ Sin

⁵ Ciertamente uno de los problemas más importantes es el descrito por Michels (1911). La clásica “ley de hierro” sostiene que los movimientos de masa inevitablemente se canalizan en organizaciones formales – organizaciones democráticas – que favorecen un élite oligarca en lugar de las masas. Así, Michel postula que el objetivo oficial de la democracia representativa de eliminar el poder político elitista es imposible. En relación a los movimientos sociales este peligro ha sido formulado más en términos burocratización o prácticas de cooptación que ineludiblemente comprometen los objetivos de la base social que dicho movimiento busca representar.

⁶ La importancia de la Ley de Participación Popular de 1994 radica en que permitió una

embargo, el origen en los movimientos sociales ha dotado al MAS de una organización interna que le ha distinguido de los partidos políticos tradicionales, y por esta peculiaridad,

apertura del espacio de participación política, al volver elegibles a las autoridades municipales de las capitales de provincia. Los cocaleros presentarían el esfuerzo más sistemático por construir una organización política ligada a la estructura sindical agraria, y serían la fuerza social más exitosa en conquistar estos nuevos espacios de poder locales. Este desarrollo marcaría el comienzo de un nuevo experimento de incursión política por parte del movimiento social indígena-campesino. Junto a la ascendencia del movimiento cocalero, del que emerge el liderazgo político de Evo Morales, el movimiento indígena experimentó una transición de un carácter contestatario ante el Estado a uno de mayor participación en los nuevos espacios políticos. En ese proceso, la idea del *instrumento político* fue madurando con la creación de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en el Congreso de la CSTUCB en 1995. A partir del año 2000 el escenario político se vio marcado por la emergencia de fuertes movimientos sociales urbanos e indígenas que gradualmente articularon un discurso reaccionario en contra del neoliberalismo y el sistema político vigente, con claros episodios en la Guerra del Agua en el año 2000 y la Guerra del Gas en el 2003. La consecuente ascendencia del movimiento indígena campesino se concretiza en la centralidad que asumen el Pacto de Unidad y la consigna indígena de la Asamblea Constituyente. En la crisis social y política se abrió así definitivamente el espacio para la ascensión de una nueva fuerza política con la victoria electoral del MAS en el año 2005. El periodo 2000-2005 puede ser entonces entendido como un ‘ciclo de las movilizaciones sociales’ con una ‘conclusión democrática’ (Prada, 2008: 142). Dicho de otra manera, la victoria electoral de Morales y el MAS es el resultado directo de las luchas populares que protagonizaron los movimientos sociales, y manifiestan el poder político que estos actores desarrollaron en dicho periodo.

ha sido el objeto de estudio de distintos autores.

La literatura muestra un amplio acuerdo en que el MAS no puede ser comprendido como un partido político a la usanza tradicional, pero existe menos concordancia sobre cómo el MAS debe ser conceptualizado. En un estudio comparativo, Van Cott ha conceptualizado al MAS como un ‘partido étnico’, buscando identificar las condiciones que propician el cambio ‘estratégico’ de movimiento a partido. De tal modo, su estudio se centra en el entorno institucional sociopolítico que permite que el “partido étnico” incurra en el sistema partidario de un país, adopte relevancia en el ámbito político y pueda ser “exitoso” –este último entendido como éxito electoral– (Van Cott 2005).

No obstante el valor del estudio comparativo de varios casos en la región sudamericana, el estudio de Van Cott deja grandes interrogantes respecto a lo que ocurre al interior de la organización en la transición de movimiento a partido. En el caso del MAS, el estudio de Van Cott se ve complementado por otros estudios que se han concentrado más bien en la dinámica interna, en los que el funcionamiento organizacional del MAS se ve caracterizado por una serie de tensiones (Salman 2013).

Hervé do Alto y Pablo Stefanoni ubican una tensión entre la base social del MAS y la incursión de un grupo social “ajeno” como resultado de la transición de “instrumento político” de los movimientos sociales a “partido de oposición” y; finalmente, a “partido de gobierno”. Según los autores, el “centro de poder real” se ha visto desplazado a

espacios más institucionales dominados por profesionales, *clases medias* y ex militantes de la izquierda tradicional (Do Alto y Stefanoni 2010, 2-3). Asimismo se ha sido señalada otra tensión en el MAS como “partido campesino”. El éxito electoral ha sido acompañado por una creciente heterogeneidad en su base social, combinada por una “jerarquía interna caracterizada por la valoración campesina”, que se complejiza aún más si se toma en cuenta el papel de árbitro que desempeña Morales (Do Alto 2011, 109).

Otros autores adjudican la tensión al interior de la organización del MAS a su carácter “híbrido”. Hugo Moldiz señala la tensión que existe al interior del MAS al intentar combinar la “forma partido” apta para los sectores urbanos y la “forma comunidad”, más en línea con los movimientos sociales rurales (Moldiz 2009, 89). En una línea de análisis similar, Anria sostiene que el MAS es una organización híbrida que opera con dinámicas y lógicas de organización distintas que dependen principalmente del espacio geográfico de operación. En las áreas rurales, el funcionamiento del MAS es mejor entendido como *movimiento social*, ya que refleja la movilización social de base, mientras que en las áreas urbanas es mejor caracterizado como una máquina populista en la que la principal dinámica consiste en conquistar a las organizaciones y redes sociales existentes. Por lo tanto, más que un movimiento social o un partido político, el MAS podría entenderse como un “partido movimiento” (Anria 2010, 2013; Molina 2011).

Según Herbert Kitschelt, el “partido movimiento” presenta una figura de transición entre el movimiento social y el partido político. Los “partidos movimientos” son en realidad coaliciones de activistas políticos que emergen de los movimientos sociales y que intentan aplicar las prácticas y estrategias organizacionales de los movimientos sociales en la arena de la competición partidaria. Se caracterizan así por la combinación de las actividades políticas formales con la movilización extra-institucional y por la ausencia de una intensiva organización interna (2006, 280-281).

El “partido movimiento” aparece particularmente adecuada para caracterizar al MAS desde su creación hasta el 2004; es decir, en su calidad de “instrumento político” y después, de “partido de oposición”, al mantener los modos informales y de baja intensidad organizacional de los movimientos sociales y haciendo política tanto desde los espacios institucionales como desde la calles.⁷ El MAS en este periodo combina además dos otras características del “partido movimiento”: el liderazgo carismático y la coordinación participativa desde las bases (Kitschelt 2006, 280-281). Según Harten, en el periodo anterior al 2004 el funcionamiento interno del MAS estaba caracterizado por una cultura de participación en la que las contribuciones de las bases en la toma de decisiones eran estructuralmente garantizadas (Harten 2011a, 76), al mismo tiempo que el liderazgo de

⁷ Un ejemplo claro de ello es el papel del MAS durante la Guerra del Gas o en los conflictos entre el gobierno y el sector cocalero en el periodo 2000-2005.

Morales se desarrollaba cada vez de manera más gravitante para la coordinación del MAS.

Sin embargo, la caracterización tanto como “partido étnico”, “partido campesino” o como “partido movimiento” emerge problemática una vez que Morales asciende a la presidencia y el MAS se inserta en la estructura estatal como el partido oficialista.⁸ Si bien el origen indígena-campesino y el discurso indigenista han formado en gran parte la identidad del MAS, lo cierto es que a partir del 2005 –en particular en relación a la competencia electoral– el Movimiento al Socialismo procuró atraer a todo sector social que sintiera descontento con el sistema político y económico. En ellos destacan los sectores urbanos subalternos, como también el segmento de la clase media que pudiera simpatizar con una izquierda moderada.

Dicha apelación se hizo a través de una diversidad de estrategias. En el sector urbano de La Paz, el MAS se organizó expandiendo un red de alianzas con organizaciones populares urbanas (Arnia 2010). Al mismo tiempo, frente a los comicios electorales, el MAS abrió sus listas para atraer a candidatos con distinto arraigo social, en particular en las clases medias, ejerciendo control y logrando así la alineación de algunos sectores de su base de apoyo original (Do Alto 2011; Zegada *et al.* 2011; Lazarte 2010; Molina 2011). El ejemplo más claro de esta estrategia se observa en las elecciones del 2009 y 2010, cuando el

MAS buscó abiertamente alianzas con antiguos candidatos de segmentos de la oposición (Harten 2011^a, 79).

En relación a la identidad “étnica” o “indígena” del partido, el desarrollo del MAS en partido de gobierno problematiza tales calificativos. Postero sostiene que el MAS, al moverse entre el activismo colectivo y la práctica política parlamentaria, ha sabido reunir su base de apoyo “heterogénea” bajo una agenda de “nacionalismo indígena” (Postero 2010, 19). De manera similar, Albro argumenta que el MAS no es un partido separatista que promueve un proyecto etno-nacional. Al contrario, hace uso de la construcción de coaliciones a nivel regional, nacional e internacional para equiparar cuestiones indígenas con otras no-indígenas y, de tal modo, articula el descontento popular con el *status quo* en un discurso indigenista (Albro 2005). Esto es congruente con lo que Harten observa como la combinación de una “lógica de equivalencias” y una “lógica de diferenciación” de demandas sociales en la que el término “pueblos indígenas” se torna un “significante vacío” capaz de abarcar una diversidad de identidades, incluso los de la clase media “blanca”. Así, “indígena” ha sido articulado como la “esencia del Estado Plurinacional” (Harten 2011a, 87).

La caracterización como “partido movimiento” se muestra también problemática. En primer lugar, Kietschelt define al “partido movimiento” como un fenómeno *transicional e inestable* (2006, 288). Ciertamente en el contexto reciente del

⁸ Sobre la dificultad que existe en definir al MAS como movimiento partido, ver también Salman (2011).

sistema de partidos políticos boliviano⁹, los más de quince años del *Movimiento al Socialismo* son al menos considerables. Al mismo tiempo, el MAS continúa desafiando los procesos de burocratización o institucionalización al estilo michelsiano, o su absorción en la práctica política partidaria convencional. De tal modo, no parece seguir ninguno de los dos destinos que Kietschelt prescribe: su desaparición o su transformación en un partido político formal (2006, 282-284).¹⁰ Asimismo, si bien al interior de su organización el MAS ha sido descrito como una “coalición inestable” (Mayorga 2007), bajo el liderazgo de Evo Morales, aparece como el único actor constante y de continuidad en el escenario político boliviano de los últimos diez años.

⁹ A partir de las elecciones generales de 1997 se puede observar un sistema de partidos políticos marcado por la rápida aparición y desaparición de nuevos partidos políticos, que muchas veces sólo participan de un evento electoral, por ejemplo Nueva Fuerza Revolucionaria (elecciones generales del 2002), Podemos (elecciones generales 2005), la alianza PPB-CN (elecciones generales del 2009) y los nuevos partidos políticos Frente de Unidad Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Verde de Bolivia en las últimas elecciones generales de 2014.

¹⁰ Vale la pena mencionar también, que en su discusión sobre ‘movimientos partidos’, Kietschelt no parece incluir dentro de las posibilidades que este tipo de actor asuma el papel de ‘partido de gobierno’. Antes de llegar a ello, ya en la práctica de partido de oposición, el ‘movimiento partido’ seguiría una de las dos alternativas aquí descritas. Así la fuerte presencia del MAS en las estructuras estatales, y el poder político que tiene, son otro factor que problematiza su caracterización como ‘movimiento partido’.

Una caracterización más apta es la formulada por Roberts en el concepto de “partido orgánico” (1998, 75):

En el modelo orgánico, las distinciones entre el partido y las organizaciones sociales que lo constituyen son difuminadas deliberadamente; así, el partido puede parecer más un movimiento que un aparato de competencia electoral, ya que se encuentra directamente involucrado en las luchas sociales fuera del ámbito de la política institucional, y los miembros y líderes del partido son reclutados directamente de los movimientos sociales en vez que de las filas de una casta política profesional separada. Si bien es inevitable que emerjan tensiones entre las esferas de actividades social y política, los partidos orgánicos procuran evitar la subordinación de su trabajo social a la lógica del poder político, al contrario de los partidos políticos de vanguardia. Del mismo modo, dado su origen en las diversas formas de organización popular, los partidos orgánicos tienden a ser más abiertos, inclusivos y pluralistas en su organización estructural, con menos control jerárquico y más espacio político para la participación democrática al nivel de las bases.

Dichos rasgos coinciden con el periodo del MAS como partido de oposición e, incluso, en el primer gobierno de Evo Morales, donde efectivamente es muy difícil dibujar las líneas que dividían al partido de los movimientos sociales, y cuando la mayoría de los líderes del partido eran directamente reclutados de los movimientos sociales: esto es especialmente notorio en el primer gabinete de Morales, en donde la mayoría de sus ministros provenía directamente de la dirigencia social, y persistía aún en el gabinete instalado en enero del 2010, donde 8 de los 20 ministerios fueron designados a figuras provenientes de los movimientos

sociales.¹¹ Asimismo, el partido ha sido descrito como “poco institucionalizado”, “cuyos cuadros políticos tienen muy poca experiencia en gestión pública” y cuyo desempeño político se ha encontrado íntimamente vinculado a la “ascendente protesta y movilización social” (Do Alto 2007, 40).

Sin embargo, existen rasgos importantes del MAS en los últimos años, que no se dejan captar por el concepto de “partido orgánico”. Roberts explica que el partido orgánico tiene dificultades en expandir su base electoral más allá de sus bases sociales, ya que su lógica de participación limita su poder de atracción a los círculos activistas. Los altos márgenes de votación obtenidos por el MAS –un 20.9% de la votación en los comicios del 2002, el 53.7% en 2005, el 64,2% de la votación en las elecciones del 2009 y el 61% en 2014¹²– dan cuenta de que el MAS ha sido uno de los partidos políticos electoralmente más exitosos en la historia boliviana. Roberts sostiene que esta “excepción” se da únicamente cuando las bases

sociales son vinculadas a líderes carismáticos, que cuentan con atractivo más amplio. Se da lugar entonces un híbrido entre el modelo de “partido orgánico” y el modelo “electoral populista” (Roberts 1998, 77). Esto es justamente lo que parece ocurrir con el MAS a partir de su ascensión al poder. Como argumenta Crabtree, el papel de su líder político –Evo Morales– ha sido “inmensamente importante” en explicar el crecimiento del partido y su capacidad de apelar a la mayoría del electorado (Crabtree 2011, 141). Coincidiendo con Do Alto, se puede concluir que el MAS permite cuestionar el límite entre la acción contestataria y la acción partidaria, ya que “pone en relieve la cantidad de ‘pasarelas’ y continuidades que existen entre ambos escenarios de acción” (Do Alto 2008, 42). En la misma línea, el MAS boliviano pone en cuestión la distinción teórica entre la “política institucional” y la “política no-institucional”, reforzando el argumento de Goldstone (2003) que tanto el movimiento social como el partido político pertenecen a un mismo espacio de acción y que no existen diferencias fundamentales entre uno y otro.

La combinación entre “partido orgánico” y “partido electoral populista” aparecen como las caracterizaciones más cercanas del MAS. Sin embargo, dichos conceptos proyectan un relacionamiento un tanto estable con sus bases institucionales que resulta problemático cuando se observa la relación Estado-movimientos sociales bajo el gobierno de Evo Morales. En la siguiente sección, a la luz de esa relación, se propone analizar al MAS y la relación Estado-

¹¹ Se trata de los ministerios de Relaciones Exteriores (David Choquehuanca); Desarrollo Productivo y Economía Plural (Antonia Rodríguez); Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Walter J. Delgadillo); Minería y Metalurgia (José Pimentel); Justicia (Nilda Copa Condori); Medio Ambiente y Agua (María Esther Udaeta); Desarrollo Rural y Tierras (Nemesia Achacollo) y; Culturas (Zulma Yugar). Vale la pena notar que los ministerios claves (como los de la Presidencia, de Gobierno, de Economía, de Hidrocarburos y de Autonomías) quedaron excluidos de esta dirigencia social.

¹² Datos obtenidos de la Corte Nacional Electoral/Órgano Electoral Plurinacional.

movimiento sociales haciendo uso del concepto de ‘redes políticas’, que permite una visión más cabal de la complejidad y dinámica de las relaciones entre distintos actores sociopolíticos que marcan el proceso político actual del país. Después de discutir brevemente el concepto, se realiza un análisis de la relación Estado-movimientos sociales bajo durante el proceso constituyente (2006-2009), como también en torno a tres conflictos entre el Estado y los movimientos sociales en el periodo post 2009: el “gasolinazo”, la construcción de la carretera por el parque nacional TIPNIS, y el conflicto político con el sector de salud.

“Redes políticas”

El concepto de “redes políticas” emerge de las insuficiencias de los modelos más tradicionales del corporativismo y el pluralismo para apreciar la complejidad, dinamismo e interconexión que caracteriza la relación entre el Estado y la Sociedad en las sociedades modernas (Martínez Escamilla 1996). Según Börzel (1997), un análisis de red permite una representación más detallada de las diferencias sectoriales y subsectoriales, el papel de los actores públicos y privados, y la relaciones formales e informales entre ellos (Börzel 1997).

Douglas A. Chalmer *et al.* (1997), tratando explícitamente la región latinoamericana, identifican la emergencia de lo que ellos denominan “redes asociativas” como un tipo más de estructura de representación (por ejemplo al lado de los partidos políticos), que interconecta a los actores

estatales y sociales. La diversificación del sector popular produciría un conjunto cambiante de grupos populares que luchan por formar un grupo de organizaciones con la capacidad de reconocer, analizar, debatir y hacer demandas alrededor de asuntos específicos.¹³ Las redes que se desarrollan alrededor de una temática particular involucran a las autoridades estatales responsables de ese asunto y a los grupos organizados que presionan demandas y estimulan el debate. Por lo tanto, estas redes no están situadas en el ámbito de la sociedad civil, sino más bien en el espacio que vincula a la sociedad civil con el Estado.

Según Kahler *et al.* (2009), a partir de la década de los ’80 la sociedad moderna se caracteriza cada vez más en términos de diferenciación y complejidad, lo cual significa una “sobrecarga” en la producción de políticas y en consecuencia pone a la gobernanza bajo presión. Por esta razón, los gobiernos se ven cada vez más dependientes de la cooperación y la movilización conjunta de recursos de actores ubicados fuera del control jerárquico estatal, lo que permite la movilización de recursos políticos en situaciones donde estos se encuentra altamente dispersos entre actores públicos y privados. Las “redes

¹³ Como explican los autores, este modelo se diferencia del pluralismo. En el pluralismo los grupos de interés hacen valer sus intereses a través de la presión sobre el Estado. Al contrario, en las redes asociativas la interacción entre actores estatales societales está caracterizada por procesos cognitivos (formular, resistir y resolver demandas competitivas) que pueden llevar a la negociación de intereses como también a su redefinición.

políticas” incluyen así a todos los actores involucrados en la formulación e implementación de una política en un sector político determinado, y está caracterizada por interacciones sobre todo informales entre actores públicos y privados, de intereses distintos pero interdependientes, que intentan resolver problemas de acción colectiva en un nivel central y no-jerárquico. Según Kahler *et al.* (2009), las “redes políticas” facilitan la gobernanza de la sociedad moderna al proveer un marco de coordinación horizontal de los intereses de actores de cuyos recursos son mutuamente dependientes. Al centrar el enfoque en las interacciones entre los actores desagregados tanto de la sociedad como del Estado el concepto de “redes políticas” implica una difuminación de los límites entre estas dos esferas.

“Redes políticas” bajo el gobierno de Evo Morales

A pesar que el uso de términos de “autonomía” y “cooptación” son comunes el debate político boliviano cuando éste versa sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales, mi investigación muestra que estas categorías resultan demasiado rígidas como para reflejar la diversidad de contenidos cambiantes que caracterizan la relación. Así, un mismo movimiento social puede aparecer en un momento “cooptado” en relación al gobierno y en otro muy “autónomo”. Lo que podría leerse como una contradicción o incoherencia, resulta considerablemente menos problemático desde una perspectiva de red.

Las “redes políticas” de relacionamiento entre el Estado y los movimientos sociales se analizan aquí en dos periodos. El primero, entre 2006 y el 2009, comprende el proceso constituyente en un contexto de alta polarización política. El segundo abarca el periodo después de la promulgación de la nueva Carta Magna y el segundo término gubernamental de Morales, y se hace en torno a tres conflictos entre el Estado y la sociedad. La relación se caracteriza a través del concepto de “redes asociativas” --un tipo de “red política”-- que se entiende como un conjunto *cambiante* de grupos populares que luchan por formar un grupo de organizaciones con la capacidad de reconocer, analizar, debatir y hacer demandas alrededor de *asuntos específicos* (Chalmers *et al.* 1997).

El proceso constituyente se desarrolla en el contexto de una fuerte polarización entre una élite tradicional que no se resignaba a la pérdida del poder político y la nueva fuerza política de carácter más popular. La Asamblea Constituyente, como punto de la “agenda de octubre”¹⁴, emerge como un contenedor para una diversidad de demandas de distintos sectores. Durante este periodo se daba un encuentro regular entre los representantes de las organizaciones sociales, los

¹⁴ La denominada ‘agende de octubre’ refiere a la agenda política que emerge después de la Guerra del Gas en octubre del 2003 y la consecuente crisis social y política. Dicha agenda comprende las demandas sociales por la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de la Asamblea Constituyente. Esta agenda es asumida por el MAS en la campaña política hacia las elecciones de diciembre del 2005, otorgándole la victoria electoral.

Asambleístas del MAS y con el mismo Morales, para la discusión no sólo de las propuestas, sino también de las estrategias de contención del alegado sabotaje por parte de la oposición. El *asunto específico* de la Asamblea Constituyente –la defensa de un proyecto popular en oposición a una élite tradicional– dio lugar a una fuerte cohesión entre distintos movimientos sociales, el MAS y el gobierno, al punto que resultaba particularmente difícil distinguir entre los distintos actores. Al mismo tiempo, definía claramente al bloque a favor del proyecto popular, y más importante aún, al bloque en contra.

El bloque conformado por el gobierno, el MAS y los movimientos sociales durante la Asamblea Constituyente, a pesar de su relativa cohesión, tampoco formaba un ente homogéneo o unitario. Así se vio clara la agencia y relativa autonomía del movimiento indígena en el espacio del Pacto de Unidad. Entendido como una “red asociativa” en torno a cuestiones “indígenas”, este espacio reunió a los actores relevantes para analizar, debatir y hacer valer matices más específicos sobre los objetivos comunes de la Asamblea Constituyente. El Pacto de Unidad fue un órgano de particular importancia. A través del Pacto de Unidad, los movimientos sociales indígenas elaboraron una propuesta integrar del texto constitucional, que forma la base de la actual Constitución. Es decir que esta “red asociativa” tuvo un alto grado de incidencia política durante el proceso constituyente. Su importancia no sólo radica en expresar la capacidad propositiva de los movimientos sociales indígenas, sino

también por el hecho que junto al trabajo de elaboración de un proyecto político, mantuvieron la acción colectiva en las calles en defensa de la Asamblea Constituyente, conteniendo así las fueras que buscaban trancar su funcionamiento.

Por su lado, el MAS creó un órgano como la REPAC que pretendió una colaboración cercana con el Pacto de Unidad; entabló alianzas con otros partidos adeptos como el Movimiento Sin Miedo; y buscó el apoyo de otros sectores sociales (urbanos, fabriles, obreros), con el objetivo de dirigir el proceso constituyente hacia sus objetivos.

El carácter *cambiante* de las “redes asociativas” se puede observar también en torno a la aprobación del nuevo texto constitucional. En el periodo 2007-2008, todavía en un contexto político bipolar, desde la ciudad de Santa Cruz se articuló una campaña dirigida a promover el NO en el plebiscito a través del cual debía aprobarse la nueva Carta Magna. En torno a este *asunto específico*, nuevamente se articuló una “red asociativa” en la forma de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). Según el discurso oficialista, este órgano debía formar una suerte de ‘poder supra-estatal’ que coordinara el poder social de los movimientos sociales con los poderes legislativos y ejecutivos, asumiendo la conducción del “proceso de cambio”. En mi opinión, resulta más acertado ver a la CONALCAM como una “red asociativa” –que reuniera a los movimientos sociales con la estructura estatal, eclipsando las diferencias y conflictos– capaz de decidir el resultado del referéndum de la misma manera que

el Pacto de Unidad había marcado el rumbo de la Asamblea Constituyente. Esto explica también el hecho de que, una vez resuelto el *asunto específico* (la aprobación del texto constitucional), la “red asociativa” CONALCAM se hubiese disuelto. La pérdida de influencia y acción del Pacto de Unidad puede explicarse de la misma manera.

La avasalladora victoria electoral del MAS en las elecciones nacionales de finales del 2009 evidenció la derrota de la oposición, dando inicio a un periodo que ha sido descrito como de “hegemonía” del MAS (Errejón Galván 2011; Uharte Pozas 2011; Zegada *et al.* 2011). Habiendo obtenido el 64% de la votación, el MAS aseguró la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, consolidando contundentemente su poder político. Justamente este momento de derrota del “enemigo común”, el poder político proyectaba una suerte de posibilidades ilimitadas para el gobierno del MAS, en tanto “instrumento político” o “gobierno de los movimientos sociales”. Esto marca un nuevo escenario para la relación entre el Estado y los movimientos sociales, en el que la ausencia del “enemigo común” abre el espacio para que se hagan presentes las demandas de carácter más sectorial y, por ende, conflictivas entre sí, en una suerte de “conflicto intra hegemónico” (Quiroz y Sandoval 2012).

La erosión de la “red asociativa” observada en el periodo 2006-2009 es notoria a partir del 2010. Mi investigación a los cinco movimientos sociales que conformaban el Pacto de Unidad, realizada a fines de ese año, mostró que sus representantes ya hacían

una distinción entre “militantes” y “afiliados”: el primer grupo, comprendido por organizaciones más campesinas (como la CSUTCB) y; el segundo, por aquellas de origen más indígena (como la CIDOB). Las organizaciones militantes mostraban un apoyo aparentemente incondicional considerando al gobierno del MAS como ‘su propio’ gobierno, mientras que las organizaciones como el CONAMAQ y la CIDOB adoptaban una posición más crítica, argumentando que el MAS había perdido el horizonte político y que el “proceso de cambio” necesitaba ser “reconducido” a través de una participación crítica y coactiva de los movimientos sociales y la sociedad civil.

En realidad, estas fisuras responden a una divergencia de intereses. Podría sostenerse que hasta el 2010 los puntos más importantes de la común “agenda de octubre”, –a saber la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos– habían sido realizados. De tal modo, la arena política quedó abierta para la expresión de una serie de demandas de carácter más particular, que hasta el momento habían permanecido eclipsadas o guardadas por objetivos más generales, y que no podían ser satisfechas todas al mismo tiempo. Ante dicho escenario, el gobierno optó por una estrategia de priorización y selección, produciendo lo que puede entenderse como una debilitación de los vínculos con los movimientos sociales (Harten 2011a, 87).

Sin embargo, dicha interpretación da lugar a pensar en cambios estructurales con cierta consistencia en el tiempo. Manteniendo a las

organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad como objeto de estudio, podría pensarse que el gobierno del MAS, al priorizar las demandas del bloque campesino, mantendría vínculos más fuertes con las organizaciones ‘militantes’, al mismo tiempo que debilitaría sus lazos con las organizaciones ‘afiliadas’ (algo parecido debiera ocurrir con otros sectores de la sociedad que pudieran ver en las políticas del gobierno la realización de sus objetivos y otras que no). De este modo, podría hacerse una clasificación de los movimientos sociales que se movieron hacia una posición de mayor autonomía en relación al Estado y otros que se prestaban con más facilidad a prácticas de cooptación.

Sin embargo, la realidad mostraba un escenario menos estático en el que el vínculo con el Estado se presentaba más cambiante y aparentemente contradictorio. A continuación, se ilustra esta dinámica a través de un análisis de tres conflictos que tuvieron lugar en los años posteriores a la reelección de Morales: el ‘gasolinazo’, la construcción de una carretera por el parque nacional y territorio indígena TIPNIS, y el conflicto con el sector médico sobre las horas de la jornada de trabajo. Dichos episodios muestran que la relación entre el Estado y los movimientos sociales se define más en torno a ‘asuntos específicos’ en la articulación de “redes políticas”.

El conflicto del “gasolinazo” refiere al decreto 780 a través del cual el gobierno procuró la revocación de la subvención al costo de los combustibles

líquidos,¹⁵ lo que se traducía en un alza de los precios con más del 50%. La medida, anunciada a fines del 2010, afectaba directamente a toda la población y más agudamente a los sectores populares. Rápidamente se articuló un rechazo contundente expresado en una multiplicación de protestas y movilizaciones en contra de la medida. También las organizaciones sociales que conformaron el Pacto de Unidad –tanto militantes como afiliados– se unieron a las protestas, paros y bloqueos. A pesar del esfuerzo de Morales por explicar y justificar el decreto,¹⁶ la presión social finalmente obligó a revertir esa medida. En esta cuestión específica, los movimientos sociales –militantes y afiliados– se encontraron nuevamente en una posición común, pero esta vez antagónica en relación al gobierno.

Desde una perspectiva de redes políticas, podría sostenerse que en este asunto particular, hubo una decisión desde la cúpula gubernamental –emanante de una lógica de Estado– pero en ausencia de una “red asociativa” de actores sociopolíticos que la sostuviera y le otorgara

¹⁵ La subvención fue establecida a través de un decreto supremo en diciembre de 1997 en el gobierno neoliberal de Hugo Bánzer Suárez. La considerable diferencia de precios estimularía el contrabando de combustible por un valor de 150 millones de dólares, lo que significa un subsidio de facto al consumo de países limítrofes. Con la expectativa de crecimiento económico del país, se esperaba que estas cifras crecieran lo que en palabras del gobierno se presentaba como un “desangramiento” económico “insostenible”.

¹⁶ El gobierno propuso la redistribución de fondos recuperados, que alcanzarían a la suma de US\$ 380 millones.

legitimidad. El efecto fue más bien la rápida articulación de este tipo de red en oposición a la medida, lo suficientemente amplia y con suficientes recursos políticos para hacer retroceder el plan gubernamental. En retrospectiva, la lectura común de las organizaciones sociales era que “Evo se había equivocado”, que había sido un error el no haber “consultado primero con las organizaciones sociales”.¹⁷ Dichas expresiones dan cuenta que las organizaciones de los movimientos sociales no se encontraban tanto en oposición *al gobierno*, sino más bien a la *política gubernamental*, es decir al *asunto específico* que procuraba este desencuentro.

El conflicto sobre el TIPNIS se desencadenó a causa del plan gubernamental de la construcción de una carretera que conectara estratégicamente a los departamentos de Cochabamba y el Beni –logrando también una conexión más directa con el Brasil– dentro de un marco general de desarrollo e integración nacional. En el proyecto, el segundo tramo de la carretera atraviesa un área protegida, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) y entra así en conflicto con temas como la autonomía indígena y la protección del medio ambiente (los derechos de la Madre Tierra) promovidos (al menos discursivamente) con vehemencia por el gobierno de Morales. El plan de la carretera pone en relieve la tensión entre la defensa de la autonomía indígena y la política de proteccionismo medioambiental con la necesidad de

estimular el desarrollo (económico) del país, en particular desde una visión mercantilista y de globalización.

La construcción de la carretera se inició antes de que se hiciera algún tipo de consulta o que se buscara consensuar el plan con las poblaciones afectadas, en contradicción a lo estipulado por la nueva Constitución y las declaraciones internacionales. En el 2011, bajo el liderazgo de la CIDOB (una de las organizaciones sociales que conformaron el Pacto de Unidad), se realizó una marcha protagonizada por los pueblos indígenas que ocupan parte del territorio. En su curso a la ciudad de La Paz, la marcha recibió mucha cobertura mediática junto al apoyo de diversos segmentos de la sociedad. La presión social logró finalmente la reversión del plan gubernamental, obligando a que se declarara al TIPNIS “territorio intangible”¹⁸ y comprometiendo al gobierno a la búsqueda de rutas alternativas.

Sin embargo, el conflicto no quedó solucionado. En el 2012 se articuló un movimiento promoviendo la construcción de la carretera por el tramo previsto, bajo el liderazgo de la Confederación de Indígenas del Sur del TIPNIS (CONISUR). Dicha instancia representaba principalmente a los colonizadores aymaras y quechuas que habían migrado a la región a partir de los años 70. La marcha recibió

¹⁷ Entrevistas por la autora con varios dirigentes de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad en enero y febrero del 2011.

¹⁸ En ese momento surgió una discusión sobre el significado específico de la “intangibilidad” del TIPNIS, ya que además de prohibir la construcción de carreteras, parecía también limitar cualquier explotación del territorio (incluso tradicional y por los mismos indígenas). El gobierno mantuvo cierta ambivalencia al respecto.

rápidamente el apoyo de organizaciones sociales como la CSUTCB y las “Bartolinas” (ambas pertenecientes al Pacto de Unidad) como también de la importante Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE).¹⁹ La CONISUR organizó una “contramarcha” que llegó a la ciudad de La Paz, demandando que el gobierno de Morales retomara la construcción de la carretera. La administración de Morales tomó la oportunidad para proponer una salida institucional al conflicto en la forma de una “Consulta Previa”. Tal propuesta, sin embargo, fue fuente de conflicto por sí misma, en relación al calificativo de la consulta. Hubo un cuestionamiento serio del carácter “previo”, ya que tanto la financiación del proyecto como la construcción de la carretera estaban en marcha antes de que se iniciaran los conflictos. Es consecuencia en el año 2012 se realizó una tercera marcha en contra de la Consulta.

Bajo mucha resistencia y conflicto, finalmente la “Consulta” se realizó entre noviembre y diciembre del 2012 con la participación de las 69 comunidades del TIPNIS. El informe oficial describe la aceptación del proceso de consulta por parte de 58 comunidades, concluyendo que el 80% dijo “sí” a la construcción de la carretera y el 82% rechazó que el territorio sea intangible (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 2012, 265-296).²⁰ El informe oficial fue

acompañado de otro informe, elaborado por la Comisión Interinstitucional de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que presentaba conclusiones contrastantes, al establecer que la consulta no fue libre ni de buena fe (FIDH/APDHB-Bolivia 2013, 21).²¹ El gobierno optó entonces por postergar el proyecto hasta el año 2015 y desde entonces la temperatura del conflicto bajó considerablemente, logrando posponer una cuestión con un potencial capital político (para la oposición) hasta después de las elecciones nacionales del 2014 (ver Argirakis 2012 y Morales 2013). El fracaso electoral de la candidatura presidencial de Fernando Vargas (quien lideró el movimiento de oposición a la construcción de la carretera) demuestra que esta estrategia fue relativamente efectiva, aunque no logró eliminar del todo el tema del debate público. En junio del 2015, el presidente Morales re-introdujo la temática, postulando que la carretera se construiría, lo cual indica una posible re-activación del conflicto en tanto distintas voces empiezan a expresarse nuevamente a favor y en contra del plan gubernamental.

En el análisis del conflicto es notorio que se trate nuevamente de una decisión gubernamental sin sustento de una “red asociativa”, lo que a su vez causó la articulación de otra “red

¹⁹ La FEJUVE tuvo un papel central en la “Guerra del Gas” proyectándose desde entonces como una de las organizaciones sociales de mayor importancia y legitimidad.

²⁰ Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) *Informe Final del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a las*

pueblos Moxeño-Trinitario, Yuracaré y Chimane del Territorio Indígenas y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) 2012. La Paz: Iskra Editores.

²¹ FIDH/APDHB-Bolivia (2013) *Bolivia: Informe de Verificación de la Consulta realizada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Securé.* La Paz, Bolivia.

asociativa” en contra del plan gubernamental con suficientes recursos políticos para hacer retroceder al gobierno, al menos en el año 2011. A partir del 2012, se observa la articulación de otra “red asociativa” a favor de la carretera, en parte orquestada por el gobierno. Así, en diciembre del 2011, el gobierno organizó un *Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio* en la que reunió a un gran número de organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de formular una *nueva agenda pública nacional*. Desde mi análisis, se trataba en realidad de reunir a los actores sociopolíticos más importantes del actual escenario político –las organizaciones y movimientos sociales– para identificar demandas y contenedores comunes que permitieran la articulación de una “red asociativa” con suficientes recursos políticos para sustentar el segundo término administrativo de Morales, equivalente a lo que fue la “agenda de octubre” para el primer término gubernamental del MAS.²²

Lo cierto es que el evento “facilitó al Gobierno la *rearticulación de su discursividad* frente a una serie de críticas y desgastes mediáticos de fines del 2011” (Argirakis 2012, 4: cursivas

²² Es necesario señalar que la gran diferencia está en que la ‘agenda de octubre’ se construyó de manera orgánica, espontánea y en las calles, mientras que el *Encuentro Plurinacional* presenta un espacio algo más institucional. Hasta mediados del 2015 no se ha vuelto a realizar un encuentro de esa índole, promovido por el gobierno. Esto explica también, que al no formularse en un contexto de lucha y protesta, no se hayan logrado tampoco objetivos tan puntuales como la “agenda de octubre”.

en el original), y fue exitoso en iniciar la articulación de una “red asociativa” a favor de la construcción de la carretera que pudo medirse con la “red asociativa” en contra, de cuyo encuentro emergió la Consulta como estrategia de resolución de conflicto. La articulación de la “red asociativa” a favor de la carretera, liderada también por organizaciones indígenas, permitió al gobierno ubicarse en una posición aparentemente neutral desde la que podía jugar un papel de “árbitro” (Salman 2011, 35), y de tal modo bajar un tanto el tono político a la discusión.

Es también de particular interés el hecho de que ambas “redes asociativas” no se movieran en esferas de acción separadas o predefinidas. En primer lugar, el conflicto del TIPNIS deja en relieve que el calificativo o identidad “indígena” no es determinante para la posición que asume el movimiento social en relación al gobierno. El conflicto del TIPNIS presenta en parte también una “disputa inter-indígena” (Morales 2013, 85) que demuestra una mayor heterogeneidad de lo que normalmente se presume. Esto se ve con claridad en las organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad, donde tanto la CIDOB como el CONAMAQ se ubicaron en oposición a la carretera, mientras que la CSUTCB, las “Bartolinas” y los “Interculturales” sostenían el plan gubernamental.

Asimismo, las “redes asociativas” no se movieron al margen de la institucionalidad estatal. La oposición parlamentaria capitalizó el potencial desestabilizador del conflicto para atacar al gobierno. Aún más importante es el hecho de que la “red asociativa” en contra de la carretera expandió sus

vínculos hasta el interior de la bancada parlamentaria del MAS. Los diputados indígenas Bienvenido Zacu y Pedro Nuni formaron una “bancada indígena” en defensa del TIPNIS, haciendo un desmarque importante porque ponía en juego la mayoría de dos tercios que hasta entonces estaba bajo el control del MAS.²³ En el gabinete ministerial, el ministro de Defensa se pronunció abiertamente en contra de la carretera. De este modo, la discusión y la lucha política se libraron tanto en el ámbito de los movimientos sociales (las marchas de las organizaciones indígenas) como al interior de los espacios institucionales de la política. Desde la perspectiva de red, el conflicto y la discusión tomaban lugar en la confrontación –no de Estado con movimientos sociales, no entre el sector indígena y un sector no-indígena– si no entre “redes asociativas” de actores sociopolíticos articuladas en torno a su posición respecto de un *asunto específico*: la construcción de una carretera.

Un tercer ejemplo muestra como la cuestión específica determina la relación Estado-movimientos sociales es el conflicto con el sector médico en abril y mayo del 2012, en torno al plan gubernamental de ampliar la jornada laboral de los médicos de 6 a 8 horas.²⁴ La medida fue recibida con un fuerte rechazo por el sector que inmediatamente organizó medidas de

²³ ‘Bolivian Indigenous Leaders Form New Caucus, Threaten MAS Majority’. *Andean Information Network*, Blog Archive, 24 de enero de 2012; “Nace bancada indígena y nombran a Pedro Nuni como su primer presidente”. *La Razón*, 19 de enero de 2012.

²⁴ La medida responde a la demanda social de la mejora del deficiente servicio de salud.

presión como huelgas de hambre y marchas, paralizando el servicio de salud pública por más de un mes. La movilización recibió el apoyo de la Central Obrera Boliviana (la organización sindical de mayor recorrido en la historia del país) y nuevamente mucha cobertura mediática. Los repetidos fracasos en las negociaciones obligaron al gobierno a optar por la “suspensión”²⁵ del decreto.

Como resolución del conflicto el gobierno lanzó la convocatoria a una Cumbre Social Nacional de Salud, de la que serían partícipes no sólo el sector médico y agentes estatales, sino también las organizaciones sociales. Este evento tendría que diseñar de forma participativa un nuevo sistema de salud y resolver los problemas del sector, incluyendo la duración de la jornada laboral de los médicos. La organización de la cumbre fue encomendada al Ministerio de Salud y Deportes al que finalmente se sumaron la Central Obrera Boliviana, el Sistema de la Universidad Pública Boliviana y el Consejo Nacional de Salud como instituciones organizadoras. La organización de la Cumbre sufrió desde entonces una serie de retrasos relacionados a desacuerdos sobre quiénes debían participar en la cumbre y de qué manera, como también la decisión de organizar cumbres departamentales que concluyeran en la Cumbre Nacional. En mayo del 2013, la organización de la cumbre se vio

²⁵ Nuevamente surgió una discusión sobre el contenido específico de la “suspensión” del decreto (el término no es jurídico), ya que la demanda del movimiento social era la derogación del mismo, aspecto que no terminó de ser despejado.

seriamente afectada por una confrontación entre el gobierno y la COB sobre la nueva Ley de Pensiones. Sumado al retraso del cronograma de las cumbres departamentales, la Cumbre Nacional fue oficialmente pospuesta hasta el año 2014.²⁶ Hasta la fecha la cumbre no he tenido lugar. Esto responde en parte al carácter electoral del año 2014 con la consiguiente postergación de temas delicados hasta después de las elecciones. Por otro lado, la falta de acuerdo entre los actores encargados de la organización del evento ha sido persistente. A principios del 2015, después de su re-elección, el presidente Morales anunció que el servicio universal de salud se implementaría en esta gestión, pero hasta el momento no se realiza su concretización debido a su complejidad y sus grandes demandas presupuestarias.

La convocatoria gubernamental a la Cumbre da nuevamente cuenta de la necesidad de que las bases de las reformas proyectadas sean definidas y sostenidas por una amplia base social, conformada no sólo por especialistas, sino también y sobre todo por las organizaciones/movimientos sociales

(populares). El éxito del movimiento social de los trabajadores de salud en torpedear el plan gubernamental debe entenderse en relación a su capacidad – como “red asociativa”– de reunir a importantes actores sociopolíticos (con suficientes recursos políticos) detrás de una demanda específica: mantener las seis horas de la jornada laboral. En este caso, se debe resaltar el apoyo que el movimiento social recibió por parte de la COB, una de las organizaciones sociales populares más importantes y con mayor legitimidad en el país, y que durante la Guerra del Gas y los primeros años de gobierno se había proyectado como un aliado del MAS. Asimismo, la cobertura mediática que recibió el movimiento significó una fuerte presión sobre el gobierno.

En este conflicto se nota la ausencia de las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad. Esto se explica en parte por la coincidencia entre este conflicto y el conflicto del TIPNIS, por lo que el tema de la salud no era considerado prioritario en ese momento. A fines del 2013, cuando el conflicto del TIPNIS se había apaciguado, las organizaciones campesinas de la CSUTCB y las ‘Bartolinas’– normalmente vistas como aliadas del gobierno– se pronunciaron autónomamente respecto al asunto. Dichas organizaciones hicieron público su plan de organizar un Congreso Nacional de Salud, que remplazara la Cumbre, para que no se aplazara más la atención universal de salud. Tanto la COB como el sector de los profesionales de salud reaccionaron defendiendo la propuesta gubernamental de realizar la Cumbre, arguyendo que de otra manera “será un

²⁶ La confrontación entre el gobierno y la COB hizo que un momento el gobierno optara por disolver al comité organizador de la cumbre. Hacia fines del 2013 el gobierno y la COB retomaron las negociaciones, incluyendo en su agenda el tema de la Cumbre de Salud. Hasta la fecha, el gobierno ha realizado cumbres departamentales en Santa Cruz, Beni y Chuquisaca. (“Trabajadores demandan informe oficial sobre Cumbre de Salud”. *El Diario*, 20 de agosto de 2013; “Desechan comisión organizadora para la Cumbre Nacional de Salud”. *La Patria*, 13 de septiembre de 2013; “Cumbre de Salud queda postergada para el 2014”. *Página Siete*, 27 de diciembre de 2013.

desacato al compromiso del Presidente”.²⁷

La imagen un tanto confusa que emerge de las posibles alianzas en este conflicto responde en parte al hecho que, al contrario del inicio del conflicto, ya no se trata de una cuestión tan específica, como es la cantidad de horas de una jornada de trabajo, que enfrentan al gobierno con un sector social particular. El gobierno propuso que en la Cumbre se discutiera la reforma y problemas integrales del sistema de salud con la totalidad de la sociedad (representada por sus organizaciones), para rediseñar un sistema de salud con alcance universal que perdure en el tiempo. El efecto de esta decisión gubernamental es que la cuestión dejó su carácter bipolar y sectorial, y se tornó así menos adecuada para su politización. Al mismo tiempo, de esta manera se devolvió una problemática mucho más compleja a los actores sociopolíticos, con la esperanza de que se pueda formar una “red asociativa” lo suficientemente amplia para sostener pero también *definir* el contenido y el nivel de reforma que se quiere alcanzar.

Una comparación de los tres conflictos devela que son en realidad las peculiaridades del asunto las que definen el contenido de las relaciones Estado-movimientos sociales. Esto coincide en parte con la lectura que hace Salman cuando señala que la “ambivalencia del MAS hace que varios movimientos oscilen entre ser aliados y opositores. Su posición depende de temas concretos, hechos específicos e incertidumbres tácticas”

²⁷ “CSUTCB anuncia Congreso de Salud en lugar de cumbre”. *La Razón*, 24 de octubre de 2013.

(2011, 38). El análisis explica la observación que hace Walter Q. Morales sobre la pregunta si los movimientos sociales son “actores autónomos” o más bien “sujetos a la manipulación y control oficial”: “La respuesta a esta pregunta es complicada porque ambas situaciones pueden existir y existen” (2013, 87 traducción propia). Efectivamente, la constatación de la variedad de posiciones que puede asumir un mismo movimiento social en relación al gobierno (a veces en acuerdo, a veces en conflicto y otras un tanto ambivalente), dificulta la posibilidad de dar respuestas inequívocas a preguntas convencionales sobre la autonomía de dichos actores.

Conclusión

A la luz del análisis presentado, concebir a los movimientos sociales en oposición al Estado, no sólo oscurece la influencia que los diferentes actores ejercen sobre sí, sino que también limita nuestro entendimiento sobre el alcance de los movimientos sociales. Vistos como adversario, el movimiento social sólo pueden tener dos tipos de relación con el Estado: o es reprimido por el Estado, o es influenciado por él en detrimento de su voluntad o intereses. El presente análisis ha demostrado que la relación mantiene una dinámica mucho más compleja.

La aparente contradicción o incoherencia que podría representar el hecho de que un mismo movimiento social pueda parecer “cooptado” por el gobierno en un momento, y altamente “autónomo” en otro, resulta perfectamente lógico en el marco de la “redes políticas”. La temática específica

que reúne al actor estatal y el movimiento social define el contenido de la relación en la medida en que permite o no la articulación de una “red asociativa”. En otras palabras en cuanto el objetivo perseguido por el gobierno sea identificado como coherente, en acuerdo o compatible con el interés particular, la relación con el movimiento social puede calificarse como de “colaboración” o bien de “cooptación”. En cuanto no haya un suficiente alineamiento de intereses, la relación será caracterizada como “conflictiva” o de “autonomía”. De tal modo, el nivel de “autonomía” o “cooptación” que un movimiento pueda sostener en relación al gobierno, denota más un momento específico en tiempo y un posicionamiento determinado en torno a una temática, que una caracterización del tipo de relacionamiento que se sostiene bajo un régimen político particular.

Asimismo, el análisis de los distintos episodios políticos muestra que la existencia de una fuerte “red política” como el MAS no impide que los distintos actores formen constelaciones o redes alternativas alrededor de asuntos específicos, a veces en línea y otras en oposición a la posición gubernamental. Efectivamente, el escenario político boliviano puede entenderse como un conjunto cambiante de alianzas y colaboraciones entre actores estatales y actores sociales en una constante articulación y rearticulación de “redes políticas”.

Más importante aún, este análisis muestra que el poder político del que el gobierno goza con su mayoría tanto en diputados como en el senado, es en

cierta medida relativo. Aparece como un factor mucho más determinante el hecho que exista o no una “red política” conformada por sobre todo movimientos sociales (con capacidad de movilización) y otros actores sociopolíticos con suficientes recursos políticos, que sustenten y legitimen los planes proyectados. Los tres conflictos analizados muestran que una decisión gubernamental que no cuenta con este tipo de sustento termina inevitablemente truncada. Es aquí donde el MAS juega un papel importante al ejercer un rol de eje articulador de “redes políticas” en torno a asuntos específicos. Más que un “partido movimiento” o “partido orgánico”, el fenómeno del MAS puede entenderse como una “red política” que depende considerablemente de su capacidad de mantener una articulación y correspondencia con actores sociopolíticos para la sustentación, implementación y también formulación de políticas públicas. En otras palabras, los espacios institucionales de formulación y ejecución no son suficientes para la realización de políticas públicas. Dichos espacios deben tener una correspondencia con espacios de los movimientos sociales y otros actores sociopolíticos.

En la relación entre el Estado y los movimientos sociales en Bolivia se observa así la necesidad moderna del aparato estatal de colaborar con una diversidad de actores por fuera de los canales institucionales para la formulación y la implementación de políticas públicas. De tal modo, este análisis coincide considerablemente con la postulación de Chalmer *et al.* (1997) de que la representación popular

deviene cada vez más dependiente de la participación de actores sociales y estatales en un conjunto cambiante de “redes asociativas” que fusionan o tornan borrosos los límites entre

actividades de “articulación de intereses”, “agregación de intereses”, “formulación de demandas” y “elaboración de políticas públicas”.

Bibliografía

- Agirakis, H. (2012). *La conflictividad social como epistemología del poder*. Documentos de Análisis. La Paz: PNUD-Bolivia.
- Albro, R. (2005). The Indigenous in the Plural in Bolivian Oppositional Politics. *Bulletin of Latin American Research*, 24.4: 433-453.
- Alvarez, S. et al. (1998). Introduction: The Cultural and the Political in Latin American Social Movements. En *Cultures of Politics and Politics of Cultures*, editado por Alvarez, S. et al. Boulder: Westview Press.
- Alvarez, S. et al. (1998). *Cultures of Politics and Politics of Cultures*. Boulder: Westview Press.
- Anria, S. (2010). Bolivia's MAS: Between Party and Movement. En *Latin America's Left Turns. Politics, Policies and Trajectories of Change*, editado por Cameron, M.A. y Hershberg, E. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Anria, S. (2013). Social Movements, Party Organization and Populism: Insights from the Bolivian MAS. *Latin American Politics and Society*, 55.3: 9-46.
- Argirakis, H. (2012). *La Conflictividad Social como Epistemología del Poder*. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Börzel, T.A. (1997). What's So Special About Policy Networks? An Exploration of the Concept and Its Usefulness in Studying European Governance. *European Integration online Papers (EIoP)*, 1.016; <http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-016a.htm>.
- Chalmer, D.A. et al. (1997). *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*. Nueva York: Oxford University Press.
- Costain, A.N. y McFarand, A.S., eds. (1998). *Social Movements and American Political Institutions*. Londres: Rowman & Littlefield Publishers.
- Crabtree, J. (2011). Electoral Validation for Morales and the MAS (1999-2010). En *Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia*, editado por Pearce, A.J. Londres: Institute for the Study of the Americas.
- Craig Jenkins, J. (1995). Social Movements, Political Representation and the State: An Agenda and Comparative Framework. En *The Politics of Social Protest*, editado por Craig Jenkins, J. y Klandermans, B. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Dagnino, E. (1998). Culture, Citizenship and Democracy: Changing Discourses and Practices of the Latin American Left. En *Cultures of Politics and Politics of Cultures*, editado por Alvarez, S. et al. Boulder: Westview Press.

- Dagnino, E. *et al.* (2006). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México: Programa Interinstitucional de Investigación-Acción sobre Democracia, Sociedad Civil y Derechos Humanos, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
- Desai, M. (2003). From Movement to Party to Government. Why Social Policies in Kerala and West Bengal are so Different. En *State, Parties and Social Movements*, editado por Goldstone, J.A. Cambridge: Cambridge University Press.
- Do Alto, H. (2008). El MAS-IPSP boliviano, entre movimiento social y partido político. *Análisis Político*, 62: 25-43.
- Do Alto, H. (2011). Un partido campesino en el poder. Una mirada sociológica del MAS boliviano. *Nueva Sociedad*, 234: 95-111.
- Do Alto, H. y Stefanoni, P. (2010). El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa. Documento de trabajo, Segundo Coloquio PNUD: Democracia interna en la elección de candidatos del Movimiento al Socialismo, La Paz, 23 de febrero.
- Errejón Galván, I. (2011). *Evo Pueblo*. La construcción hegemónica del MAS en Bolivia. En *Del asalto a la transformación del Estado en Bolivia*, editado por Errejón Galván, I. y Serrano, A. Barcelona: Viejo Topo.
- FIDH/APDHB-Bolivia. (2013). *Bolivia: Informe de Verificación de la Consulta realizada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure*. La Paz, Bolivia.
- Forewaker, J. (1995). *Theorizing Social Movements*. Londres: Pluto Press.
- Glenn, J.K. (2003). Parties out of Movements: Party emergence in Postcommunist Eastern Europe. En *State, Parties, and Social Movements*, editado por Goldstone, J. A. *et al.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Gray Molina, G. (2004). Comentario de George Gray Molina. En *Crisis y Reforma de los Partidos en Bolivia*, editado por PNUD-Bolivia. La Paz, Bolivia:
- Goldstone, J. A. *et al.* (2003). *State, Parties, and Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harten, S. (2011a). *The rise of Evo Morales and the MAS*. Londres: Zed Books Ltd.
- Harten, S. (2011b). Towards a “Traditional Party”? Internal Organization and Change in the MAS in Bolivia. En *Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia*, editado por Pearce, A.J. Londres: Institute for the Study of the Americas.
- Johnston, H. (2011). *States and Social Movements*. Cambridge: Polity Press.
- Kahler, M. *et al.* (2009). *Networked politics: agency, power and governance*. Nueva York: Cornell University Press.

- Kietschelt, H. (2006). Party Movements. En *Handbook of Party Politics*, editado por Katz, R.S. y Crotty, W. Londres: Sage Publications Ltd.
- Lazarte, J. (2010). *Nuevos códigos de poder en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Plural Editores.
- Mainwaring, S. y Scully, T.R. (1995). *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Martínez Escamilla, V.H. (1996). Las políticas públicas desde la perspectiva de las redes sociales: un nuevo enfoque metodológico. *Política y Cultura*, 7: 37-60.
- Mayorga, F. (2007). Movimientos Sociales, Política y Estado. *Opinión y Análisis*, 84.I: 1-17.
- McAdam, D., McCarthy J.D. y Zald, M.N. (1996) *Comparative perspectives on social movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Migdal, J.S. (2001). *State in Society*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Mirza, C.A. (1995). *Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO LIBROS.
- Moldíz, H. (2009). *Bolivia en los tiempos de Evo. Claves para entender el proceso boliviano*. México, D.F.: Ocean Press y Ocean Sur.
- Molina, F. (2011). El modelo de resolución política del MAS. En *Cuaderno de Futuro 26. Claves de la transición del poder*, editado por Cortéz Hurtado, R. La Paz: PNUD, EDOBOL.
- Morales, W.Q. (2013). The TIPNIS Crisis and the Meaning of Bolivian Democracy under Evo Morales. *The Latin Americanist*, 57.1: 79-90.
- O'Donnell, G. y Schmitter, P. C. (1986). Resurrecting Civil Society (and Restructuring the Political Space). En *Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy*, editado por O'Donnell, G. et al. Londres: The Johns Hopkins University Press.
- Prada, Raúl (2008) *Subversiones indígenas*. La Paz, Bolivia: Muela del Diablo Editores, Comuna y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Postero, N. (2010a). Morales's MAS Government: Building Indigenous Popular Hegemony in Bolivia. *Latin American Perspectives*, 37: 18-34.
- Postero, N. (2010b). The Struggle to Create a Radical Democracy in Bolivia. *Latin American Research Review*, 45: 59-78.
- Quiroz, M. y Sandoval, L. (2012). Conflicto intrahegemónico en Bolivia en el bloque en el poder MAS/movimientos sociales. *Anuario del Conflicto 2011*: 341-366.

- Roberts, K.M. (1998). *Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru*. Stanford: Stanford University Press.
- Schönwälder, G. (1997). New Democratic Spaces at the Grassroots? Popular Participation in Latin American Local Governments. *Development and Change*, 28.4: 753-770.
- Salman, T. (2009). Searching for Status: New Elites in the New Bolivia. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 86: 97-105.
- Salman, T. (2011). Entre protestar y gobernar. Movimientos sociales en Bolivia en tiempos del MAS. *Tinkazos*, 29: 21-43.
- Salman, T. (2013). El Estado, los movimientos sociales y el ciudadano de a pie: exploraciones en Bolivia entre 2006 y 2011. *América Latina Hoy*, 65: 141-160.
- Scott, A. (1990). *Ideology and the New Social Movements*. Londres: Routledge.
- Seferiades, S. y Johnston, H. (2012). *Violent protest, contentious politics and the neoliberal state*. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
- Tapia, L. (2009). *La coyuntura de la autonomía relativa del estado*. La Paz, Bolivia: CLACSO, Muela del Diablo Editores.
- Tarrow, S. (1998). *Power in movement: social movements and contentious politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2007). *Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Tilly, C. y Tarrow, S. (2007) *Contentious Politics*. Colorado: Paradigm Publishers.
- Uharte Pozas, L.M. (2013). La disputa política por la hegemonía democrática en Bolivia. *Intersticios*, 7.2: 149-166.
- Van Cott, D.L. (2000). Party System Development and Indigenous Populations in Latin America: the Bolivian case. *Party Politics*, 6.2: 155-174.
- Van Cott, D.L. (2005). *From Movements to Parties in Latin America. The evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zegada, M.T. et al. (2011). *La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano*. La Paz, Bolivia: Muela del Diablo Editores, CLACSO.
- Zuazo, M. (2009). *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundación Ebert.
- Zurbriggen, C. (2003). Las redes de políticas públicas. Una revisión teórica. Instituto de Ciencia Política, Montevideo, Uruguay; Institut internacional de Governabilitat de Catalunya. <http://www.politicaspUBLICASysalud.org/documentos/gestion-social-del-conocimiento/finish/23-gestion-social-del-conocimiento/213-las-redes-de-politicaspUBLICAS-una-revision-teorica.html>, extraído el 08.08.2011.

CENTRO MINERO DE ARACA: ORÍGENES, DESARROLLO PRODUCTIVO Y EXPANSIÓN DEL CAPITAL FINANCIERO (1917-1925)

ALAN ALVARO QUISPE CRUZ
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAND ANDRÉS

Resumen:

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX Bolivia toma un nuevo rumbo en la industria extractiva pasando de la producción de plata al estaño, esto en cuanto a su intensidad productiva y su demanda. Así Bolivia recobraría su fortaleza de manera estratégica, con una vertiginosa producción y exportación de estaño acompañada de una ventaja favorable por el alto valor en el mercado de comercialización de minerales. Los estudios en torno a la industria minera estañífera, sin embargo, se enfocan principalmente agrupando de manera general a tres figuras que ejercieron dominio y monopolio en la primera parte del siglo XX, los Barones del Estaño. Sin embargo, además de las empresas explotadas por lo Barones existió un conglomerado de empresas y minas explotadas por mineros medianos y pequeños productores, de las que poco se hace referencia. El presente estudio explora una empresa que conformaba el conglomerado del grupo Patiño Mines, Araca o la Sociedad Empresa de Estaño de Araca. El estudio concluye que la transición de la producción del oro por la del estaño, en Araca responde a los requerimientos del mercado mundial resultado de la expansión industrial de países como Inglaterra y Alemania en primera instancia y Estados Unidos posteriormente. En respuesta ante la alta demanda, Araca pasa de la primigenia explotación realizada por un industrial nacional al traspaso de todas las concesiones a un consorcio que comienza a operar con criterios más idóneos en materia de industria, con diversas repercusiones en la economía nacional.

Summary:

At the end of the XIX and the beginning of the XX century Bolivia changes directions from a silver extractive industry to tin in both, its productive capacity and internal demand. In this way Bolivia recovers its productive strength in a strategic manner, with an accelerated production and export of tin supported by favorable prices and conditions in international markets. Most studies on the tin industry, however, are focused mainly on the three main figures that exercised monopoly control in the first part of the XX century, the tin Barons. Nevertheless, besides the companies exploited by the Barons there was a conglomerate of companies and mines exploited by medium miner companies and small producers, of which there is little reference. This article explores the case of a company that was part of the Patiño Mines conglomerate group, Araca or the Tin Company Society of Araca (*Sociedad Empresa de Estaño de Araca*). The article concludes that the transition from gold production to tin in Araca responds to the requirement of global markets resulting from the industrial expansion of England and Germany in first instance, and the United States later on. In response to this high demand, Araca moves from a company owned by nationals to a consortium that operates with better technologies for the industry, with strong repercussions in the national economy.